

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-19140-2023
CARATULADO : MEDINA/FISCO DE CHILE - CONSEJO

Santiago, treinta y uno de Julio de dos mil veinticuatro

VISTO:

A **folio 1**, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, comparecen don GUILLERMO HERNÁN LARA LEAL, abogado, domiciliado en calle Manuel Antonio Maira 1011, casa Q, comuna de Providencia, en representación de don **HERNÁN WALDO MEDIDA POBLETE**, cédula nacional de identidad número 5.895.357-1, domiciliado en calle Pepe Vila N°446, comuna de La Reina, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado- en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por Raúl Letelier Wartenger, abogado, domiciliado en calle Agustinas N°1225, piso 4, comuna de Santiago.

En cuanto a los hechos, transcribe el relato del demandante que consta del siguiente tenor:

“Nací en 1951 en Santiago, hijo de una familia de trabajadores, mi madre fallece cuando tenía 7 años y con ello la familia se disuelve, a mi mandan a vivir con mi abuela materna a Linares y mis otros 2 hermanos se van a vivir con la abuela paterna. En el año 1961 le da Cáncer a mi abuela y me llevan a vivir con mis otros hermanos y la Abuela Paterna, no fui bien acogido, era un extraño para ellos. Estudie parte de la primaria en Linares y otra en un colegio de cura en Conchalí, la secundaria hasta segundo humanidades lo curse en el Liceo Municipal de Ñuñoa. A iniciativa de mi Padre, cuando tenía 14 años, ingreso a la escuela de Grumetes de la Armada donde se preparaban a los marinos y suboficiales de la Marina en la Isla



Foja: 1

Quiriquina. A los 18 años, solicite mi baja porque quería ingresar a la Universidad, asunto que no logro y ya comenzaba a tener inquietudes políticas.

Ingreso en Concepción al Partido Socialista y por mi formación militar en la Armada me asignan al Departamento de seguridad y de ahí, al dispositivo de seguridad presidencial, todo ello formado en Enero de 1970 después del atentado y muerte del comandante del Ejército General Rene Schneider. Después a este dispositivo se le conoce como el GAP, nombre puesto por un periódico de Derecha, encargado de la seguridad del Presidente y su entorno, dispositivo que no existían antes en Chile. El día del Golpe Militar no participo de la defensa de la Presidencia por encontrarme con permiso médico para realizarme unos exámenes, que después supe que tenía un soplo al corazón. Me contacto con mis superiores y se me indica que debo irme a una casa de seguridad en donde permanezco hasta el 17 de Septiembre de 1973. Ese día me junte con mi esposa y caminando en la calle Vicuña Mackenna soy reconocido por dos Carabineros que pertenecían a la escolta Presidencial, me detienen y golpean en la calle, me ingresan al interior de la radiopatrulla y me llevan a la Tercera Comisaria de Santiago, en donde soy interrogado violentamente y me vinculan con Carlos Altamirano que era en esa fecha intensamente buscado, me golpean y patean, me entierran un madero en la pierna y herido me trasladan encapuchado al Estadio Nacional con un letreo que decía: Secretario de Altamirano.

En el Estadio Nacional me reciben a golpes y me trasladan a un camarín, personal del ejército me cura la herida en la pierna, desde ahí me sacan al recinto donde se interroga; me golpean y amarrado desnudo me aplican corriente en los genitales, en la boca y las sienes quedando en muy malas condiciones físicas. Preguntan siempre lo mismo, donde esta Altamirano y si conocía algún lugar en donde se podía ocultar, les dije otra vez que yo no tenía ningún vínculo con él y desconocía donde podía ocultarse. Me llevaron encapuchado a interrogarme unas cuatro veces, en una oportunidad me tropecé y golpearon mi cara con un culatazo provocando una herida cuya cicatriz perdura hasta hoy, me hundieron la cabeza en aguas servidas, en otra me sacaron dos uñas de mi mano izquierda. Dejaron de



Foja: 1

tortúrame cuando les pedí por favor que me mataran porque no sabía del paradero de Altamirano. En Noviembre me visita mi esposa y me comunican que me trasladan al Norte al Campo de Concentración de Chacabuco. Nos llevan en Buses alrededor de 400 prisioneros a Valparaíso a un muelle de la Marina, nos embarcan en el Transporte Maipo, barco carguero que transportaba salitre, en sus bodegas acomodaron a todos los prisioneros. Durante el traslado me topé con un conocido de mis años como grumete, un cabo torpedero quien se sorprende al verme y me dice ¿qué hace aquí “Chiporrito”? (así nos llamaban a los grumetes), luego me sacan y me llevan a la cocina a conversar y me preparan un sándwich de carne que luego compartí con otros prisioneros. Llegamos a Antofagasta y nos trasladan en un tren de trocha angosta a la oficina salitrera de Chacabuco, en donde se encontraba el Campo de Prisioneros, del cual fuimos sus primeros ocupantes, su custodia estaba a cargo del Ejército. Permanecí en el campo de prisioneros de Chacabuco hasta su cierre en Noviembre de 1974.

Los detenidos que quedamos nos trasladaron en un avión militar a la Base Aérea de la Fach en Quintero, nos apalearon a la bajada y nos tiran como animales a los camiones que nos llevan al campo de concentración de Puchuncaví a cargo de la Armada. Me reconoce un suboficial de la Armada y le avisa a mi familia donde me encuentro, y fui el primero en recibir visita al día siguiente, este mismo suboficial me informa que nos van a trasladar a todos y que la estancia en ese lugar sería corta. Efectivamente a los 10 días salimos con rumbo a Santiago al recinto de detención de Tres Álamos a cargo de Carabineros.

Estuve en Tres Álamos hasta el 8 de Junio del 1975, fecha en que soy expulsado del País con la prohibición de regresar y mi pasaporte marcado con una L. Durante el tiempo que estuve en Tres Álamos recibí la última golpiza de parte del Jefe de Carabineros a cargo del campo de detenidos Conrado Pacheco. Como antiguo prisionero, presidía el consejo de ancianos y en una protesta por mejorar las condiciones en que estábamos me llevaron a una bodega y me golpearon, dejándome en la oscuridad y en compañía de las ratas. Salí del País con mi esposa e hija, gracias a la gestión del CIME quienes buscaban residencias a los prisioneros expulsados entre las naciones de



Foja: 1

Europa. Finlandia fue el País que me acogió, una cultura distinta pude estudiar y trabajar como Mecánico Naval y apenas apareció la Lista de personas autorizadas para regresar al Chile en 1988 vine de visita a ver a mis familiares y volví definitivamente en 1990.

A mi regreso me doy cuenta de que este es otro país y que tampoco yo soy el mismo, y aún soy una persona que no ha superado el dolor. Al ver los familiares de mis compañeros del Gap que fueron muertos o fusilados siento que ese era el destino que me correspondía”.

Expone que don Hernán Waldo Media Poblete fue reconocido por el Estado de Chile como víctima calificada por medio de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N°1.040 de 2003, con el número 14.599.

En cuanto al derecho describe que los actos ilícitos cometidos por los agentes del Estado y que causaron daño, en el caso de la demandante, ocurrieron a partir del 17 de septiembre de 1973, época que regía la Constitución de 1925, la que fue fuertemente transgredida, por lo que con esta primera detención se vulneró el artículo 13 de dicha normativa, así como también su artículo 14 y 15. Asimismo se infringió el artículo 72 N° 17, en relación al artículo 44 N° 13 respecto del estado de excepción y la restricción de las libertades. Refiere que igualmente existe diversa legislación internacional, tales como Tratados, Convenciones, Declaraciones y Actas, que el Estado de Chile suscribió y se ha obligado cumplir en materia de protección a los derechos humanos. Entre estas normativa, cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por resolución de la Asamblea General de la ONU, adoptada por los Estados miembros en San José de Costa Rica, siendo sus normas ius cogens, y forman parte del Derecho internacional Público de carácter imperativo y las cuales no admiten disposiciones que el derecho interno las contravengan.

Sostiene que en Chile se vulneraron las disposiciones de los artículos 3, 5, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Indica que en relación al Pacto de San José de Costa Rica se infringieron las normas de los artículos 5 N° 1 y 2, y artículo 7. Añade que con el fin de dar cumplimiento de las disposiciones por los Estados parte, se estableció una comisión que recibe



Foja: 1

las denuncias y las tramita proponiendo una solución amistosa, y en caso de que el Estado no la acoja, el afectado puede ocurrir ante la Corte Interamericana en un plazo de tres meses. Alude al artículo 63 de la Convención que refiere a las garantías y reparación al daño ocasionado y al pago de una justa indemnización.

Arguye que en la actual constitución en su artículo 5 inciso 2° se reconoce la primacía de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana por sobre la soberanía del Estado, encontrándose por tanto garantizados dichos derechos, así como también en los tratados internacionales, por este motivo la trasgresión a estos derechos debe ser investigado, sancionado y reparado el daño ocasionado. En relación a lo anterior, indica que el artículo 38 inciso 2° de la Carta Fundamental respecto de la responsabilidad del Estado.

Finaliza haciendo presente que los hechos relatados cometidos por los agentes de Estado en contra del demandante, consistente en torturas prisión ilegal y destierro del país, acreditándose el daño, este debe ser reparado por la responsabilidad directa que cabe al Estado, y por las consideraciones legales citadas.

En definitiva, solicita se condene a la demandada por la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) por concepto de daño moral, o bien en su defecto, a la suma que el tribunal considere en justicia, más los intereses generados desde la mora en el pago efectivo, con costas.

A folio 7, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, se notificó la demanda.

A folio 8, con fecha once de enero de dos mil veinticuatro, comparece don Marcelo Chandía Peña, cédula nacional de identidad número 14.269.086-1, abogado Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4°, comuna de Santiago, contestando la demanda de autos, solicitando el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por don Hernán Waldo Medina Poblete, en su calidad de víctima de detención, tortura y apremios ilegítimos, en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.



Foja: 1

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, alegando la improcedencia de la indemnización solicitada por haber sido ya indemnizado el demandante, alegando que la Ley N° 19.123, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, han establecido distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a familiares directos de éstas, mediante tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas. Explica que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Luego, analiza cada una de estas compensaciones, señalando, respecto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, que en término de costos generales para el Estado de Chile, este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, un desembolso total de \$992.084.910.400, que corresponden a las siguientes indemnizaciones: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.

Indica que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y 19.992, y sus respectivas modificaciones, estableciendo esta última una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.



Foja: 1

Adicionalmente, consigna que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios o superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, refiere que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, destacando la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto de indemnizaciones acordes a nuestra realidad económica, que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.



Foja: 1

Así las cosas, estima que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos; de esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente, por lo que, estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante de la presente causa.

En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Ello por cuanto del relato del demandante la detención ilegal, prisión política tortura que sufrió ocurrieron a partir del 17 de septiembre de 1973, en circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte con fecha 19 de diciembre de 2023, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la dictadura militar.

En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, por cuanto entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Expone que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, siendo la prescripción una institución universal y de orden público, donde las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado.



Foja: 1

Indica que ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Convención Americana de Derechos Humanos.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En tercer término, en cuanto al daño e indemnización reclamada, en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, controvierte el monto solicitado, atendida la naturaleza de la indemnización solicitada, considerando excesiva la suma, haciendo presente que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, debiendo atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, siendo las cifras pretendidas en la demanda excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de



Foja: 1

reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia.

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, ya que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por el demandante en su libelo, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse. Respecto de los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, por consiguiente, en el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y se condene al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En virtud de todo lo anterior, solicita se rechace la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 12, con fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, dando por reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.



Foja: 1

Añade que respecto a la excepción de pago o de reparación integral alegada por el Fisco de Chile, la que se construye sobre la base de que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos habrían sido indemnizadas íntegramente, mediante reparaciones con transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y simbólicas de diverso tipo, considera que no es posible sostener que el conjunto de acciones listadas por la demandada pueda ser suficientes para estimar que no es procedente la acción civil para demandar los daños que concretamente haya sufrido la víctima, pues entre las unas y la otra existe una clara diferencia en cuanto a su naturaleza y forma de determinación.

Precia que las medidas reparatorias y compensatorias dentro del marco de la Ley N°19.123, tienen un fin y una naturaleza diversa al daño moral. Aquellas cubren daños materiales, en cambio, por la acción deducida, se pretende cubrir los sufrimientos específicos e íntimos de la víctima, que comprenden los diversos trastornos que los ilícitos les han causado y les siguen causando.

En lo relativo a la excepción de prescripción, invoca el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República, reiterando que de los tratados internacionales suscritos por Chile claramente se señala el deber de reparar el daño causado, y en armonía con ello se desprende que, si los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en lo penal, con mayor razón lo deber ser en lo civil, puesto que existe la obligación de reparar. Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Pide en definitiva tener por evacuado el trámite de réplica, solicitando desde ya rechazar las excepciones, defensas y alegaciones esgrimidas por el Fisco de Chile.

A folio 14, con fecha uno de febrero de dos mil veinticuatro, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las alegaciones realizadas en el escrito de contestación de la demanda, solicitando se acojan las excepciones opuestas, declarando que se le niega lugar al libelo en todas sus partes, con expresa condena en costas.



Foja: 1

A folio 15, con fecha nueve de febrero de dos mil veinticuatro, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que deberá recaer ésta.

A folio 31, con fecha nueve de mayo de dos mil veinticuatro, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, comparece don Guillermo Hernán Lara Leal, abogado, en representación de don Hernán Waldo Medina Poblete, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, solicitando se le condene al demandado al pago de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos), por los daños sufridos como víctima de crímenes de lesa humanidad.

Funda su solicitud en las razones de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de la sentencia, las cuales se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que, con fecha once de enero de dos mil veinticuatro, comparece don Marcelo Chandía Peña, abogado Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, contestando la demanda por el Fisco de Chile, solicita el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por don Hernán Medina Poblete, en base a las excepciones, defensas y alegaciones relatadas en la parte expositiva de la sentencia, las que se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

TERCERO: Que, con fecha nueve de febrero de dos mil veinticuatro, se recibió la causa a prueba, estableciéndose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1°. – Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios demandados a causa de la detención, rapto y tortura de don Hernán Medina Poblete, a manos de agentes del Estado; 2°. – Si dichos daños o perjuicios derivan de la falta de servicio del Fisco de Chile y circunstancias de los mismos; 3°. – Efectividad de haber recibido los demandantes algún tipo de indemnización, beneficio y/o reparación, en virtud de las leyes especiales de reparación.



Foja: 1

CUARTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

I.- Documental: **1)** Certificado de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad donde se consigna la fecha de detención de Henan Waldo Medina Poblete por Carabineros de Chile, los lugares de detención y tortura, y las fechas en que fue expulsado del país y la que fue autorizado para regresar; **2)** Copia de la página 359 de la nómina de personas reconocidas como víctimas, del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde el demandante ocupan el lugar 14.599; **3)** Copia fiel del certificado de la Comisión Nacional de Detenidos del Ministerio de Defensa en que se certifica que Hernán Medina Poblete se encuentra detenido en el Campamento de Chacabuco; **4)** Copia fiel de la página del Registro de Prisioneros del Ejército donde se señala la nacionalidad, actividad o profesión, campamento o lugar de detención (Estadio Nacional) ocupando Hernán Medina Poblete el numero orden 3981000; **5)** Copia del Decreto 637 del Ministerio del Interior que expulsa del País a las personas que indica, por orden del Presidente de la República, por constituir un peligro para la seguridad de la República. El demandante Hernán Medina Poblete ocupa el lugar 33; **6)** Informe de Evaluación Psicológica efectuada al demandante por la psicóloga Elisa Neumann García y diagnóstico de síndrome de Estrés Post-Traumático de carácter crónico y cuadro depresivo grave; **7)** Copia del Capítulo VIII “Consecuencias de la Prisión Política y la Tortura” del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech; **8)** Copia fallo de la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema emitido el 14 de septiembre del 2015, rol 1092-2015; **9)** Copia de la Sentencia de la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema pronunciada el 26 de abril del 2017, rol 11767-2017; **10)** Resolución N° 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada el 19 de Abril del 2005 “Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”; **11)** Copia de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso



Foja: 1

Ordenes Guerra y Otros vs. Estado de Chile de fecha 29 de noviembre de 2018.- en donde el Estado de Chile renuncia a alegar la excepción de prescripción.

II.- Testimonial: 1) Elisa Neumann García, cédula nacional de identidad número 6.897.185-3.

QUINTO: Que, por su parte, la parte demandada rindió la siguiente prueba instrumental:

- 1) Oficio ORD.: DSGT N° 21671-2024, emitido por el Instituto de Previsión Social, respecto de los beneficios de reparación Leyes N°s 19.992 y 20.874, emitido con fecha 27 de marzo de 2024.

SEXTO: Que, no habiendo sido discutido por el Fisco de Chile los hechos en que se basa la demanda, los cuales además se ven refrendados por los elementos probatorios aportados al juicio, es posible tener por establecidos como hechos no controvertidos, los siguientes:

1.- Que don Hernán Waldo Medina Poblete, fue detenido el 17 de septiembre de 1973 en la vía pública por agentes del Estado de Chile, fue conducido a la Tercera Comisaría de Santiago y posteriormente al Estadio Nacional, lugares donde fue torturado por sus captores.

Luego, es trasladado al centro de detención Chacabuco, lugar donde permaneció hasta su cierre en noviembre de 1974, después al campo de detenidos de Puchuncaví y finalmente al recinto de detención Tres Álamos, sufriendo privación de libertad hasta el 8 de junio de 1975, fecha en que fue expulsado del país.

2.- Que don Héctor Maturana Urzúa se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, en el Registro N° 14.599.

SÉPTIMO: Que, a fin de acreditar el hecho a probar número uno fijado por el tribunal, esto es, la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios demandados a causa de la detención, rapto y tortura de don Hernán Medina Poblete, a manos de agentes del Estado, y si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por el actor -sino únicamente la suma pedida a su respecto-, la demandante acompañó prueba instrumental y testimonial, la cual no fue objetada por la contraria y tuvo la



Foja: 1

aptitud para probar la existencia y naturaleza del daño moral provocado a don Hernán Medina Poblete a causa de la detención ilegal, torturas y encarcelamiento que sufrió durante la dictadura militar.

Es así, como el informe de evaluación psicológica emitido por la psicóloga doña Elisa Neumann García, quien además compareció en calidad de testigo ratificando el informe elaborado por medio de tres evaluaciones, los días 5, 12 y 21 de septiembre de 2023, da cuenta que el entrevistado presenta actualmente secuelas producto de la detención, tortura y prisión política que sufrió a manos de agentes del Estado en el contexto de la dictadura cívico-militar.

En particular, el informe precitado concluye que el Sr. Medina presenta hasta la actualidad pesadillas recurrentes, síntomas fisiológicos y psicológicos intensos frente a sucesos que le recuerdan la experiencia traumática sufrida, sensación de vulnerabilidad, impotencia, desesperanzas, intensos sentimientos de culpa por haber sobrevivido mientras otros fueron muertos o desaparecidos.

Describe que la sintomatología observada es propia del síndrome de estrés postraumático de curso crónico, que termina configurando un cuadro depresivo grave.

Agrega que el padecimiento se prolonga con su expulsión del país. Por tanto, el trauma de la tortura se suma al desarraigo, la pérdida de lazos familiares y afectivo, de sus raíces e idioma, debiendo adaptarse a una cultura, idioma y patrones de relación totalmente ajenos a la idiosincrasia de origen.

En definitiva, lo anteriormente descrito significa un quiebre vital radical en momento de consolidación de la identidad, que han ocasionado daños profundos y duraderos en la personalidad del entrevistado, con consecuencias clínicas importantes que requieren tratamiento terapéutico y psiquiátrico.

En consecuencia, atendidos los antecedentes señalados, el tribunal tendrá por acreditada la existencia del daño moral o extrapatrimonial reclamado por el actor, en calidad de víctima de detención, torturas y prisión política a manos de agentes del Estado.

OCTAVO: Que, siendo el fundamento de la demanda la violación a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar, es preciso mencionar que el presente caso debe ser abordado desde la situación de



Foja: 1

conflicto que vivía el Estado de Chile durante aquél periodo, siendo de público conocimiento que acaecieron durante esta transición violaciones masivas a los derechos humanos, existiendo obligación por parte del Estado de Chile de reconocer y brindar una reparación íntegra en esta materia, toda vez que aquella obligación deriva de lo que prevé la actual Constitución Política de la República en sus artículos 5 y 6, los cuales incorporan a nuestro ordenamiento jurídico interno los principios generales del Derecho Internacional y la normativa de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes relativa a los derechos humanos, siendo un deber de los órganos del Estado descartar normas que sean contrarias a la Carta Fundamental.

Entre otras, las normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro sistema normativo interno está la Convención Americana de Derechos Humanos, desprendiéndose de sus artículos 1.1 y 63.1 la obligación del Estado de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada por una vulneración a los derechos y libertades por ella reconocidos, no pudiendo el Estado de Chile, conforme el artículo 27 de la Convención de Viena, desconocer esta obligación, sino que por el contrario, debe respetarlos y promoverlos, haciendo efectivo los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2.3^a, permite que “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo”, lo que supone buscar plena reparación, que es concordante con lo consagrado en el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

De esta forma, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos nace al momento en que con su actuar infringe los límites



Foja: 1

que señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de la persona, como la libertad o la integridad física y/o psíquica.

Finalmente mencionar que la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde en su artículo 3 dispone que la administración del Estado está a servicio de la persona humana, siendo su finalidad promover el bien común, y uno de los principios a los que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; siendo consecuente con ello el artículo 4 de la misma ley, que prescribe que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones (...)”, concordante con lo que dispone el artículo 38 de la Constitución Política de la República.

Todo lo anterior permite concluir que el daño causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad debe ser indemnizado por el Estado.

NOVENO: Que, en cuanto a la denominada excepción de reparación integral opuesta por la demandada, por haber sido resarcido el actor conforme a la Ley N° 19.123, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, conforme al hecho a probar número tres fijados por el tribunal, esto es, efectividad de haber recibido el actor algún tipo de indemnización, beneficio y/o reparación, cabe señalar que si bien consta en Ordinario N° 21671-2024, emitido por el Instituto de Previsión Social, que el señor Hernán Medina Poblete ha recibido un total de beneficios concedidos en las Leyes N° 19.992 y 20.874 de \$39.923.436, teniendo una pensión actual Valech de \$264.898, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, rechazándose en definitiva esta excepción.

Aquello por cuanto las mencionadas leyes por el Fisco de Chile si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los derechos humanos o a sus familiares directos, en modo alguno impiden ejercer el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado de obtener una indemnización distinta de una reparación de carácter meramente asistencial, que es lo que establecen las leyes aludidas, sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado de reparar el daño moral



Foja: 1

experimentado por aquellas víctimas, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional pero no incompatible.

A mayor abundamiento, cabe señalar que los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes N° 19.123, 19.980, 19.992, 20874, entre otras, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por el daño moral provocado por agentes del Estado, los que en ejercicio de su función pública, durante un período de extrema anormalidad institucional representando al gobierno de la época, abusaron claramente de su potestad y representación, dando lugar a los agravios a los derechos humanos de diversos conciudadanos que tenían una determinada visión política, cual es lo acontecido en la especie.

Por lo expuesto, parece también razonable que la reparación que haya hecho el Estado en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no puede dejar de considerarse al momento de determinar el monto de los perjuicios, ya que estas medidas tienen un efecto en la extensión del daño cuya indemnización ahora se demanda.

En definitiva, será rechazada la excepción de reparación integral opuesta por la parte demandada.

DÉCIMO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil, y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo cuerpo normativo.

Al efecto, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 5 de la Constitución Política de la República que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, por cuanto esta disposición constitucional permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del



Foja: 1

derecho humanitario, entre los cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que entonces adquiere rango constitucional.

Teniendo presente lo anterior, la prescripción extintiva de las acciones deducidas por el demandante no puede decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, toda vez que este cuerpo normativo busca regular las obligaciones que surgen para los sujetos por un concurso real de voluntades, un hecho voluntario de la persona que se obliga, un hecho que ha inferido daño o injuria a otra persona o por disposición de la ley, resolviendo situaciones de relativa equivalencia o de igualdad, mientras que el Estado, respecto de quienes habitan dentro de sus fronteras y quedan por ende sujetos a su jurisdicción, no actúa respecto de ellos en igualdad, se relaciona con las personas desde su posición de autoridad, como garante de los derechos fundamentales de que las personas son titulares.

Es por ello que el estatuto jurídico comprendido y conformado por el derecho común, de donde emana la norma de prescripción invocada por la demandada, resulta insuficiente para resolver acerca de la prescripción de las acciones que emanan del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, la acción indemnizatoria en tal caso queda de cargo de las normas que emanan del derecho internacional de derechos humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional.

Dado que no existe norma internacional expresa, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, como los ya mencionados, es posible concluir que ante las violaciones de derechos fundamentales, anteriores y superiores estos al Estado mismo, y nuestra Constitución, en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, garantizar y no discriminar, la aplicación que se haga del derecho interno a la luz de los tratados internacionales debe conducir a darles seguridad y eficaz protección a los derechos, reconociendo, declarando y



Foja: 1

potenciando la vigencia de éstos, debiendo por tanto el Estado cumplir con su obligación no solo de investigar y sancionar los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos, sino que reparar a las víctimas de aquellos en su integridad.

De esta manera, se concluye que la acción resarcitoria que nace de la comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible, de modo que siendo el hecho generador del daño que se invoca la violación de derechos humanos, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, de naturaleza meramente patrimonial, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto, los que deben primar por sobre las normas civiles internas.

Los razonamientos anteriores conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la parte demandada.

UNDÉCIMO: Que, descartadas las alegaciones realizadas por la demandada, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada, atendida la normativa mencionada y los hechos establecidos por parte del Tribunal.

En su libelo la parte demandante persigue la indemnización del daño moral, que corresponde al sufrimiento que le provocó la experiencia de la detención ilegal, tortura y prisión política, siendo expulsado del país con prohibición de regresar.

DUODÉCIMO: Que, habiéndose establecido que el daño causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad debe ser indemnizado por el Estado, por tanto hace responsable al Estado, procede determinar la cuantía del daño moral que reclama el actor, toda vez que su existencia fue analizada en el considerando séptimo.

El daño moral será entendido como una lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a las personas e imputable a otra.



Foja: 1

En la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la libertad y la integridad física y psíquica a que fue sometido el demandante con motivo de su detención, tortura y prisión política por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, la angustia de temer por su vida, el hecho de hallarse en un estado de vulnerabilidad, el dolor, las amenazas y el daño físico y psíquico provocados, como se desprende de la prueba aportada al juicio, que importa un sufrimiento corporal y psíquico, se constituye como un dolor de la persona constitutivo de daño moral, el cual debe ser resarcido.

Lo anterior no puede si no ser analizado en su contexto, como se ha indicado, debido que es posible presumir que el temor ocasionado por las circunstancias de la época naturalmente incrementó dicha aflicción, cuyas secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, truncando el normal desarrollo, debido al actuar ilegal llevado a cabo por agentes del Estado.

De esta manera, el daño moral ocasionado al demandante no es sino una consecuencia inmediata y directa de la detención, torturas y prisión política cometida por agentes del Estado, secuelas psicológicas y emocionales que han permanecido a lo largo de los años.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, habiéndose determinado la existencia del daño moral sufrido por el demandante y la responsabilidad del Estado de indemnizar éste, corresponde fijar su cuantía en dinero, para lo cual el tribunal considerará el mérito de los antecedentes aportados al proceso, fijando el quantum indemnizatorio conforme a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, como la revictimización causada a causa de la exposición posterior de los hechos, lo que se hará prudencialmente, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, a fin de cumplir con el principio de reparación integral que rige en la materia.

Así las cosas, el tribunal regulará la cuantía del daño moral en la cantidad total de treinta millones de pesos (\$30.000.000).



Foja: 1

DÉCIMO CUARTO: Que, la suma ordenada pagar deberá reajustarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; y, respecto de los intereses, estos se devengarán a partir de la fecha en que la parte demandada se constituya en mora.

DÉCIMO QUINTO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derechos Humanos; y demás normas pertinentes, **se resuelve:**

I.- Que se **rechazan las excepciones** de reparación integral y prescripción deducidas por la parte demandada.

II.- Que se **acoge parcialmente la demanda**, interpuesta a folio 1, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de treinta millones de pesos (\$30.000.000) a favor del demandante Hernán Waldo Medina Poblete, con los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo cuarto precedente.

III.- Que se exime del pago de las costas a la parte demandada.

Notifíquese por cédula a las partes.

Anótese, regístrese, consúltese si no se apelare, y archívese en su oportunidad.

ROL C-19.140-2023.

Resolvió Paulina Valenzuela Negrete, Juez Suplente.



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta y uno de Julio de dos mil veinticuatro**

